

# El conflicto armado y los procesos de negociación en Colombia

## Impacto y perspectivas sobre la formación y desarrollo de capital social

### Introducción

El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser un proceso histórico complejo y persistente, que ha generado grandes pérdidas –en muchos casos irreversibles– en términos de capital humano, social y económico. Sus orígenes se encuentran enmarcados en grandes problemas sociales y económicos que no se han resuelto adecuadamente y que reflejan una gran deficiencia en lo que respecta a los patrones de acumulación existentes, sin que éstos se hayan modificado hasta hoy.

Como alternativa para la solución de este problema, diversos sectores de la sociedad, y principalmente el Estado, han tratado de buscar soluciones negociadas al conflicto durante décadas. A pesar de esto, en la actualidad la magnitud del conflicto colombiano es cada vez más grave; además, la política económica no apunta a la resolución de éste, ya que se centra en lo monetario y en la estabilidad macroeconómica, pero no pretende modificar el patrón de acumulación existente ni asegurar el fortalecimiento de la cohesión como instrumento para la construcción de capital social.

La violencia y el conflicto armado en Colombia obedecen a un complejo conjunto

de factores económicos, sociales, históricos y políticos. Durante décadas, el país ha registrado un patrón de crecimiento económico que ha coexistido con la pobreza, la desigualdad en la distribución de la riqueza productiva (por ejemplo, la distribución de la tierra) y la inequidad en el acceso tanto a las oportunidades económicas (empleo, educación, crédito) como a las decisiones públicas. Además, Colombia ostenta una larga historia de conflictos armados, tales como el enfrentamiento entre liberales y conservadores en el siglo XIX, el llamado período de la «Violencia» de mediados del siglo XX y la agudización del conflicto armado desde las décadas de los ochenta y noventa con la irrupción del narcotráfico y los grupos paramilitares. El conflicto interno en Colombia es indicativo de las dificultades profundas de las instituciones políticas del país para encarar por vías pacíficas los conflictos subyacentes en toda sociedad.

El análisis de las causas y evolución del conflicto en Colombia, así como del proceso de

---

*Suly S. Muñoz B., Carlos A. Rodríguez M.*  
*Estudiantes de Décimo Semestre*

negociación, va más allá de la descripción cuantitativa: debe interpretarse en función de los impactos que causa no sólo en el desarrollo económico sino también en el social, y más específicamente en la formación de capital social. Este último se refiere a las instituciones, las relaciones y las normas que conforman la calidad y la cantidad de las interacciones existentes dentro de una sociedad, y que sirven, además, como factor facilitador en la obtención de prosperidad económica y desarrollo sostenible. El capital social no sólo es la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino también la materia que las mantiene juntas. El capital social tiene implicaciones importantes, tanto para la teoría como para la práctica y la política de desarrollo. Se relaciona, en efecto, con todos los aspectos que tradicionalmente se han considerado como indicadores de bienestar y desarrollo, tales como las mejoras en la educación y en los servicios de salud, la construcción de instituciones políticas competentes y responsables, y la generación de condiciones para la aparición de mercados libres capaces de competir en la economía global.

### Desarrollo del conflicto

Diferentes análisis históricos sitúan las raíces del conflicto y la violencia en el mismo proceso de nacimiento de Colombia, en especial en los enfrentamientos armados entre liberales y conservadores que tienen su manifestación histórica más cercana en la llamada «Violencia», una verdadera guerra civil que se extendió desde 1948 hasta 1957. En 1958, la instauración de un nuevo régimen concertado, el del Frente Nacional, permite disminuir la violencia en la mayor parte del país. No obstante, el conflicto per-

siste con baja intensidad en las décadas de 1960 a 1970, período en el que desaparece la guerrilla liberal y cobran protagonismo los grupos guerrilleros de carácter comunista de diferentes tendencias: pro-cubanos (MOEC y ELN), comunistas (las FARC) y maoístas (el EPL). También aparecen grupos paramilitares que atacan a quienes consideran colaboradores de los guerrilleros. Paralelamente, la masa de campesinos se ve obligada a desplazarse a las ciudades, invirtiéndose en pocos años la proporción campo-ciudad. En la década de 1970, bajo el régimen de alternancia del Frente Nacional, crecen los movimientos de protesta social, se fortalecen los frentes guerrilleros en el campo y se desarrollan importantes acciones armadas en las ciudades; al mismo tiempo, los diferentes gobiernos de este período generalizan la lucha antissubversiva con el apoyo de los E. U. A., inspirándose en la política de la «Seguridad Nacional». En este período se extienden los cultivos de marihuana, se procesa en laboratorios la coca procedente de Bolivia y Ecuador y se tejen las redes de contrabando que permitirán el desarrollo posterior del narcotráfico. La situación extrema de violencia institucional se produce en 1978 con el Presidente Julio César Turbay Ayala, quien tras llegar al poder con una participación electoral del 20% expide una legislación que da manos libres al ejército y a las fuerzas de seguridad para desencadenar una represión generalizada. En la década de los años ochenta se disparan las violencias y se expande el paramilitarismo en diferentes regiones; los objetivos de éste son defender diferentes intereses políticos y económicos (esmeraldas, minería, petróleo, control de territorios del narcotráfico, etc.) y ejercer el control territorial al igual que los grupos gue-

rilleros, lo cual genera una atmósfera de terror y miedo que conduce a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, la mayoría de las veces bajo la mirada pasiva del ejército.

Así mismo, el cultivo de la coca se generaliza y los grupos guerrilleros van conquistando nuevos territorios e implicándose poco a poco en la protección de cultivos ilegales, con el fin de obtener financiamiento y mejorar las condiciones de vida campesina en los territorios por ellos controlados. Por otra parte, los latifundistas controlan cada vez más explotaciones agrícolas; así, en 1997 los propietarios de explotaciones de más de 500 hectáreas –el 0,3% del total– controlaban el 45% del área cultivable.

### **Estrategias económicas de los actores y desarrollo social en Colombia**

En los últimos cincuenta años, el país ha experimentado importantes transformaciones en su estructura económica, política y social, muchas de las cuales han sido determinadas por la violencia. Aunque algunas de ellas han modernizado la sociedad, lo cierto es que también han profundizado las desigualdades sociales, agudizando las diferencias en las condiciones de acceso a las oportunidades y a los logros de la vida moderna y democrática. Paralelamente se han generado condiciones para que algunos recurran a la coacción, a la intimidación y al uso de la fuerza para apuntalar privilegios, agudizar la exclusión y supeditar los intereses generales a los particulares.

De esta forma se ha ido consolidando un círculo perverso de la violencia en múltiples manifestaciones, desde el conflicto armado y

la delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico, hasta la violencia cotidiana que se expresa con mayor fuerza en las ciudades y que contribuye a deteriorar la convivencia ciudadana. Todo ello ha impedido, entre otros factores determinantes, la construcción, el enriquecimiento y la legitimación democrática de lo público.

Por otra parte, uno de los rasgos más sobresalientes en las tres últimas décadas es el desarrollo de la producción nacional y el mercado internacional de drogas ilícitas. Desde los inicios de la década de los setenta, con el auge de la producción de la marihuana y luego con el cultivo y la exportación de la cocaína y la heroína, Colombia se ha visto envuelta en uno de los procesos que más perversamente han influido en su estructura económica, política y social.

El narcotráfico, la actividad ilegal de mayor rendimiento y poder de depredación en el capitalismo de hoy, ha alcanzado un decisivo poder desestabilizador y ha sacado provecho de la crisis de la sociedad colombiana, potenciándola en términos de una aguda fragmentación del tejido social. Este fenómeno se ha generado por la falta de presencia territorial y la precariedad del Estado, el clientelismo, la corrupción, la impunidad, la crisis de representación política, la intimidación y el uso de la fuerza para asegurar lealtades, la exclusión social y la excesiva inequidad en la distribución del ingreso y la pobreza.

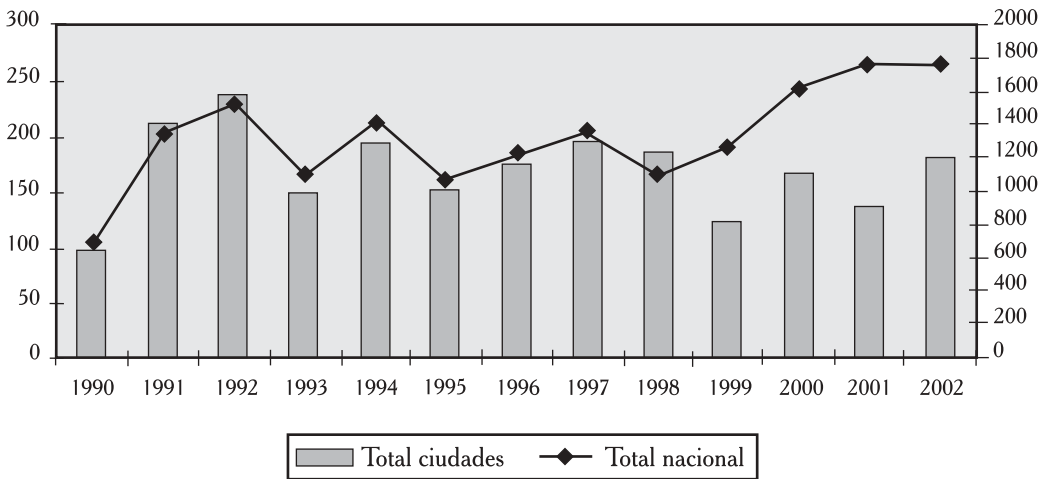
La estructura social, a su vez, se ha visto alterada en varios sentidos. El gasto de los narcotraficantes, por ejemplo, sirvió para crear redes de provisión en beneficio de algunos colombianos que percibieron incrementos en sus ingresos. En este sentido, el narcotráfico propició un doble movimiento



en las pautas de movilidad social: por una parte, estimuló una movilidad ascendente de estos beneficiarios directos; pero, por la otra, contribuyó a reconcentrar la riqueza en pocas manos. Esto ocasionó un deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana,

puesto que las organizaciones violentas utilizaron como mano de obra criminal a jóvenes que se convirtieron en delincuentes, lo cual determinó la creación de bandas dedicadas al crimen o al comercio de drogas ilícitas.

**Gráfica 1**  
**Evolución de la intensidad del conflicto en el país vs. las ciudades (1990-2002)\***

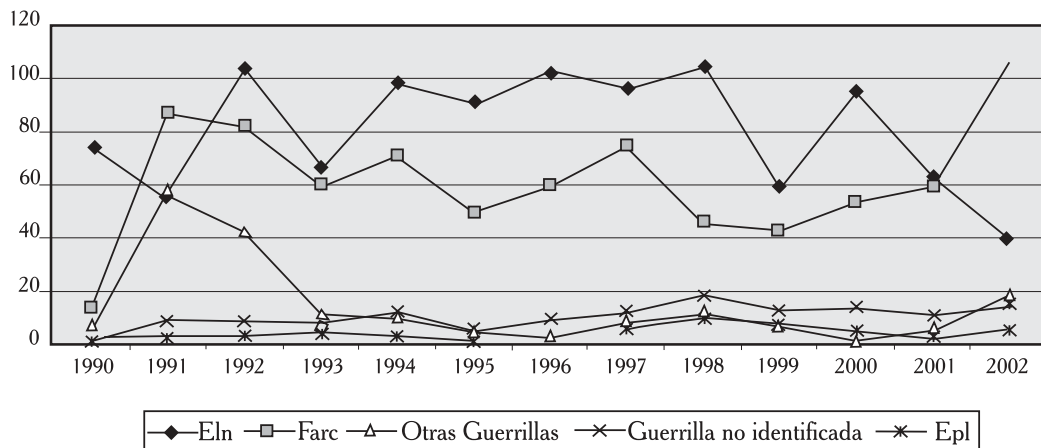


Fuente: Boletines diarios del DAS

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

\*2002 incluye hasta septiembre y las cifras no están proyectadas a todo el año.

**Gráfica 2**  
**Evolución de las acciones armadas de la guerrilla en las ciudades\***

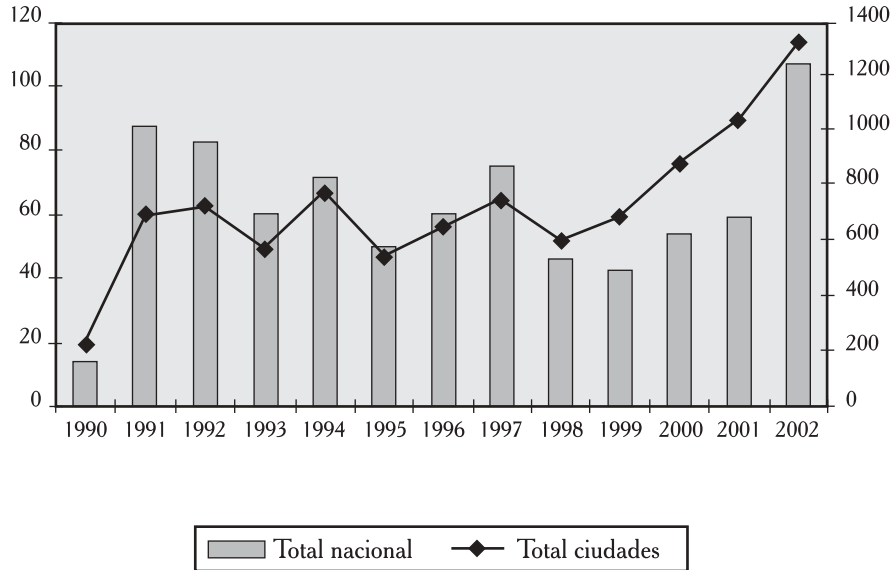


Fuente: Boletines diarios del DAS

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

\*2002 incluye hasta septiembre y las cifras no están proyectadas a todo el año.

**Gráfica 3**  
**Evolución comparada de la actividad armada en las FARC en el país y en las ciudades**  
**(1990-2002)\***



Fuente: Boletines diarios del DAS

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

\*2002 incluye hasta septiembre y las cifras no están proyectadas a todo el año.

### Los costos de la guerra

En este proceso investigativo queremos identificar la evolución de los costos directos brutos del conflicto armado en Colombia en el período 1990-1998, y presentar una aproximación a la estrategia de la guerrilla a partir del análisis de la tendencia en los costos; dicho análisis se enfoca en función de las acciones que causan el costo, así como en el costo unitario por acción. Puesto que las variables de mayor incidencia relativa en la composición de los costos son el exceso de gasto militar, el homicidio, el secuestro, las acciones armadas y los cultivos ilícitos, el presente trabajo analiza el conflicto armado

tomando como base la evolución de éstas y su incidencia en el costo total del conflicto.

Podemos decir que las investigaciones más recientes –las cuales han abordado el estudio de la violencia en Colombia desde la teoría económica– se han centrado en la estimación de los costos tanto de la violencia urbana como del conflicto armado<sup>1</sup>. Sin embargo, hasta ahora no se han utilizado para interpretar y ampliar el entendimiento del conflicto mismo, ni tampoco para profundizar en el análisis de las variables de mayor incidencia. Así mismo, buscamos identificar la relación entre la estimación de los costos que genera el conflicto armado y las estrategias de los principales actores armados.

<sup>1</sup>Se destacan los trabajos de Rubio (1996, 1998); Trujillo y Badel (1997); López y García (1998); Granada y Rojas (1995); Clavijo (1998) y Cisalva (1997), entre otros.

## Los costos de la violencia y el conflicto armado en Colombia<sup>2</sup>

**Cuadro 1**  
**Costos directos brutos de la violencia en Colombia**  
**(cifras en miles de millones de pesos de 1995)**

	91	92	93	94	95	96	97	98	Promedio	% PIB
Violencia urbana	2.105	1.760	1.829	1.984	1.975	2.153	2.444	2.490	2.093	2,95
Conflicto armado	985	822	975	771	1.226	1.400	1.450	1.296	1.115	1,55
TOTAL	3.090	2.583	2.804	2.755	3.202	3.553	3.894	3786	3.208	
% PIB	5,2	4,2	4,3	4,0	4,4	4,6	4,9	4,7		4,5

Fuente: Badel (1999)

### En búsqueda del orden político

El orden político implica la capacidad del Estado para crear compromisos creíbles; esto significa que el mismo Estado garantiza, a la vez, los derechos de propiedad y la justa distribución de tales derechos. En este sentido, el Estado debe limitar los monopolios y preparar a los ciudadanos para asimilar las oportunidades sociales. Ésta es una condición para lograr el establecimiento de una economía de mercado con normas que limiten el alcance irrestricto que puedan tener algunos depredadores para apropiarse de los bienes ajenos, y que posea sistemas de control social que promuevan, además, los méritos y el trabajo como fuente indispensable de superación. En efecto, una sociedad que privilegie la trampa y el juego sucio por encima de la disciplina y el esfuerzo está expuesta a sufrir conflictos permanentes; la trampa alimenta el desorden, y una sociedad tramposa inhibe las acciones legales para gestionar negocios lícitos.

Es obvio que el orden es el fundamento de la organización política de la sociedad y, además, del desarrollo económico, pues una economía de mercado resulta insuficiente sin el

orden social; por ello, los países están condicionados a experimentar equilibrios o desequilibrios económicos, dependiendo de los grados de orden o desorden predominantes. En Colombia, desde hace varias décadas, se viene afirmando la necesidad de contar con un Estado fuerte, pero los formadores de opinión y los políticos se preocupan por lo que quiere decir «fuerte», y no por lo que significa «Estado»; por tanto, el debate se torna inconveniente, pues en verdad el orden social resulta inconcebible sin un Estado suficientemente estable, capaz de promover relaciones de compromiso creíbles con respecto a las instituciones políticas.

El esquema básico que logra representar un sistema de orden político en el país debería tener las siguientes características:

- Una matriz institucional que produzca una serie de organizaciones y establezca una serie de derechos y privilegios.
- Una estructura estable de relaciones de intercambio, tanto en los mercados políticos como económicos.
- Un conjunto subyacente de instituciones que comprometa de forma creíble al Estado con una serie de normas políticas y

<sup>2</sup>Durante esta década se ha elaborado una importante cantidad de literatura relacionada con la violencia y el conflicto armado. Con relación a los costos de la violencia y el conflicto armado se encuentran los trabajos de Granada y Rojas (1991), Trujillo y Badel (1997), Rubio (1997, 1998). Con relación a la geografía del conflicto, sobresalen los trabajos de Echandía (1998) y Reyes (1998).

con el fortalecimiento de los derechos que protegen a las organizaciones y las relaciones de intercambio.

- Conformidad, como resultado de una mezcla de interiorización normativa y mecanismos externos (a los individuos) para hacer cumplir las normas.

En la economía resulta indispensable contar con la estabilidad que proveen las reglas y las normas, pero éstas se garantizan dentro de un Estado que pueda sustentarse en una sólida constitución y en instituciones políticas adecuadas. Proteger los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos y proporcionar estabilidad macroeconómica, son tres demandas que los ciudadanos esperan del Estado que los protege. Lo anterior demuestra que no basta con las dotaciones: se necesita una forma de gobierno que inspire confianza en la ley.

La gente debe tener la oportunidad de encontrar un ambiente social que coadyuve a premiar los comportamientos altruistas. Las actividades productivas de la economía sólo pueden nutrirse en una sociedad que favorezca el reconocimiento al mérito y los logros que resultan del esfuerzo y la disciplina. El orden social y los incentivos positivos a las actividades productivas y emprendedoras son, pues, las dos caras de una misma moneda.

### **Crítica acerca de las comunicaciones del Plan de Desarrollo**

Colombia afronta uno de los conflictos armados de mayor duración en el mundo, con hondas repercusiones en todos los aspectos de la vida social. En las últimas décadas el conflicto se ha agudizado de manera significativa, pues las organizaciones armadas al

margen de la ley han incrementado su tamaño y su presencia en el territorio, así como sus acciones terroristas contra la población civil y la infraestructura económica y social del país, a la vez que han estrechado sus vínculos con negocios ilícitos como el tráfico de drogas.

Con el objetivo de defender el ordenamiento democrático y el Estado de Derecho, garantizar la seguridad y la libertad de la población, proteger los derechos humanos e impulsar la prosperidad económica y la equidad social, el Gobierno Nacional viene implementando un modelo integral de Seguridad Democrática que le permita al Estado recuperar la autoridad con criterios de legitimidad, legalidad y gobernabilidad. La Seguridad Democrática comprende el ejercicio de una autoridad efectiva que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos humanos y la protección y promoción de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas. Así entendida, la Seguridad Democrática trasciende el concepto tradicional de seguridad ligado exclusivamente a la capacidad del Estado para coartar y penalizar a aquellos individuos que infringen las normas de convivencia en sociedad. En última instancia, la política de Seguridad Democrática busca la construcción de un orden social que proteja y beneficie a los ciudadanos en sus diferentes espacios y ámbitos, asegure la viabilidad de la democracia y afiance la legitimidad del Estado.

La responsabilidad primordial de velar por los derechos y libertades del ciudadano corresponde al Estado; pero la seguridad es también producto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía. La participación activa de ésta y de todos los sectores de la sociedad civil al



colaborar con la administración de justicia y apoyar a las autoridades, es parte esencial del fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, la cooperación ciudadana reposa, ante todo, en el principio de la solidaridad, sobre el que se funda el Estado Social de

Derecho. En esta medida, el apoyo de la ciudadanía a las autoridades, su colaboración con la administración de justicia y su participación en los programas propuestos son los componentes básicos de la política de Seguridad Democrática. ☺

---

## Bibliografía

AROCHA, Jaime; CUBIDES, Fernando, y JIMENO, Myriam. *Las violencias: inclusión creciente*, Centro de Estudios Sociales (CES), 1998.

CASTRO Q., Manuel Fernando; ARABIA WARTENBERG, Jorge, y CELIS, Andrés Eduardo. *El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia 1990-1998*. Departamento Nacional de Planeación, 1999.

CLAVIJO, Sergio. *Dividendos de paz y costos de la guerra en Colombia: la fuerza pública y su presión fiscal*, Documento CEDE-Universidad de los Andes, Bogotá 1998.

RAMÍREZ TOBÓN, W. «La guerrilla rural en Colombia: ¿una vía hacia la colonización armada?», en *Estudios rurales latinoamericanos*, vol. 4, núm. 2, Bogotá, mayo-agosto de 1981.

RANGEL, Alfredo. *Colombia: la guerra de fin de siglo*, Bogotá, 1998.

ZULOAGA, Jaime. *Colombia: violencia, democracia y guerrilla*, ponencia presentada en el Seminario sobre los Actuales Procesos de Diálogo y Negociación, CINEP, Bogotá, 30 de noviembre y 1º de diciembre de 1989.

*La violencia de los años 90 en Colombia: su evolución en las grandes ciudades y costos económicos directos*, informe de consultoría, DNP-UPRU.